

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ D.C.**

**ACCIÓN DE TUTELA**

**RADICADO: 11001-41-05-008-2022-00444-00**

**ACCIONANTE: SERTIC S.A.S. EN REORGANIZACIÓN**

**ACCIONADA: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA**

**SENTENCIA**

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), procede este Despacho Judicial a resolver la acción de tutela impetrada por la sociedad **SERTIC S.A.S. EN REORGANIZACIÓN** quien solicita el amparo de su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la **GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA**.

**RESEÑA FÁCTICA**

Manifiesta el accionante, que el día 28 de marzo de 2022 radicó un derecho de petición ante la **GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA**, bajo el radicado No. SER-GC-10-2022.

Que a la fecha han transcurrido más de 60 días y la accionada no ha suministrado respuesta.

Por lo anterior, solicita se ampare su derecho fundamental de petición y se ordene a la accionada dar respuesta a su petición.

**CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA**

**GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA:**

La accionada allegó contestación el 21 de junio de 2022, en la que informó que dio cumplimiento a lo solicitado por el accionante, toda vez que ese mismo día suministró

respuesta a su derecho de petición, a través de los correos electrónicos [comercia@serticasas.com.co](mailto:comercia@serticasas.com.co) y [financiero@serticasas.com](mailto:financiero@serticasas.com)

Por lo anterior, solicita se declare improcedente la acción de tutela, por cuanto atendió la petición oportunamente según lo establecido en el Decreto 491 de 2020, encontrándose de esta forma un hecho superado.

## CONSIDERACIONES

### PROBLEMA JURÍDICO:

En concordancia con los hechos que fundamentan la acción de tutela, corresponde al Despacho responder el siguiente problema jurídico: ¿La **GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA** vulneró el derecho fundamental de petición de la sociedad **SERTIC S.A.S. EN REORGANIZACIÓN**, al no haberle dado respuesta a su petición del 28 de marzo de 2022?

### MARCO NORMATIVO

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento judicial de carácter constitucional, subsidiario, residual y autónomo, dirigido a facilitar y permitir el control de los actos u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares cuando estos vulneren derechos fundamentales.

Esta acción constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona, a fin de obtener la pronta y efectiva defensa de los derechos fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable, o cuando no exista otro medio de defensa judicial.

### DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, fue expedida la Ley 1755 de 2015 “*Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, una norma de carácter estatutario, que establece la regulación integral de este derecho fundamental.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que su contenido esencial comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en

términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibir las o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas<sup>1</sup>.

Conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido por las siguientes reglas y elementos de aplicación<sup>2</sup>:

*“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.*

*2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.*

*3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser **oportuna**, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe **resolver de fondo** el asunto solicitado. Además de ello, debe ser **clara, precisa y congruente** con lo solicitado; y (iii) debe **ser puesta en conocimiento** del peticionario.*

*4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.*

*5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.*

*6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.*

*7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.*

*8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.*

*9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.*

---

1 Sentencia T-251 de 2008. Citada en las Sentencias T-487 de 2017 y T-077 de 2018.

2 Sentencias T-296 de 1997, T-150 de 1998, SU-166 de 1999, T-219 de 2001, T-249 de 2001, T-1009 de 2001, T-1160 A de 2001, T-1089 de 2001, SU-975 de 2003, T-455 de 2014.

Así entonces, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz.

Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse que ésta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y cumplir el propósito de que la respuesta sea conocida a plenitud por el solicitante. Esta característica esencial implica, además, que la responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración o el particular, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una constancia de ello.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de petición supone un resultado que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición. Sin embargo, se debe aclarar, que el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa<sup>3</sup>.

En síntesis, la garantía real del derecho de petición radica en cabeza de la administración o del particular una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información.

Es importante señalar, que el artículo 5° del **Decreto 491 de 2020**, amplió los términos para resolver los derechos de petición, pasando de 15 a 30 días hábiles mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria. La norma en comento dispuso lo siguiente:

***“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:***

---

<sup>3</sup> Sentencia T-146 de 2012.

*Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

*Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.*

*(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.*

*Cuando excepcionalmente se fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.*

*En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.*

*Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.”*

La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de este artículo a través de la Sentencia C-242 de 2020, declarándolo exequible de forma condicionada, bajo el entendido de que la ampliación de términos para solucionar las peticiones no solo es aplicable a las autoridades públicas, sino que también se hace extensible a los particulares.

Valga señalar, que si bien la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022 derogó el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, en criterio del Despacho esta última norma debe seguirse aplicando a las peticiones que se encuentren en curso o que se hayan radicado durante su vigencia; es decir, que los términos originalmente establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se reestablecerán pero para las peticiones radicadas a partir del 18 de mayo de 2022.

### **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”<sup>4</sup>. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Sentencia T-970 de 2014.

<sup>5</sup> Sentencias T-588A de 2014, T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de 2009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y T-253 de 2004.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y *“previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”*<sup>6</sup>. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

En ese orden, la Corte Constitucional ha desarrollado la teoría de la carencia actual de objeto como una alternativa para que los pronunciamientos no se tornen inocuos, y ha aclarado que el fenómeno se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado.

Con relación a la categoría de carencia actual de objeto por hecho superado, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos: *“Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”*.

La Corte Constitucional, en numerosas providencias, ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado<sup>7</sup>. En efecto, si la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, cuando la perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, el peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo.

Luego, al desaparecer el hecho o los hechos que presuntamente amenazan o vulneran los derechos de un ciudadano, carece de sentido que el juez profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos de las personas. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo<sup>8</sup>.

En síntesis, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del actor a partir de una conducta desplegada por el transgresor. En otras palabras, la omisión o acción reprochada por el accionante, ya fue superada por parte del accionado.

Cuando se presenta ese fenómeno, la obligación del juez de tutela no es la de pronunciarse de fondo, solo cuando estime necesario *“hacer observaciones sobre los hechos que originaron*

---

6 Sentencia T-168 de 2008.

7 Sentencias T-267 de 2008, T-576 de 2008, T-091 de 2009, T-927 de 2013, T-098 de 2016, T-378 de 2016 y T-218 de 2017.

8 Sentencia T-070 de 2018.

la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes<sup>9</sup>. De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado<sup>10</sup><sup>11</sup>.

### CASO CONCRETO

Partiendo de las consideraciones expuestas y de la documental allegada, observa el Despacho que la sociedad **SERTIC S.A.S. EN REORGANIZACIÓN** elevó un derecho de petición ante la **GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA**, en el que solicitó lo siguiente:

*“La expedición de una certificación, especificando la fecha en que esta se emite sobre la experiencia en desarrollo del Contrato No. 1537 de 2015 celebrado el 23 de diciembre de 2015, y los correspondientes otrosíes, adiciones y demás, cuyo objeto es, Auditoría financiera e interventoría técnica y operativa al contrato No. GM-001-1993, concesión Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y el concesionario Proyectos de Infraestructura S.A. PISA S.A. suscrito entre Departamento del Valle del Cauca y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEL VALLE conformado por los integrantes BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S. con una participación del 51% y SERTIC S.A.S. con una participación del 49%.*

*La certificación solicitada debe contener como mínimo la siguiente información:*

- *Nombre de la empresa contratante (Entidad)*
- *Nombre del Contratista. (Si se trata de un consorcio o de una unión temporal favor señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente favor indicar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros.*
- *Número del contrato.*
- *Objeto del contrato.*
- *Fecha de inicio y fecha de finalización (día, mes y año).*
- *Valor total facturado a la fecha de expedición de la certificación (Incluido IVA)*
- *Obligaciones y/o funciones ejecutadas.*
- *Cargo y firma de quien expide la certificación.*
- *E-mail de persona de contacto.*
- *Dirección y teléfono de la entidad.*
- *Estado del Contrato.”<sup>12</sup>*

La petición fue radicada por el accionante el día 29 de marzo de 2022, de forma física en las instalaciones de la **GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA**, quedado con el radicado PQRS No. 2022017172<sup>13</sup>.

9 Sentencia T-890 de 2013.

10 Sentencias SU-225 de 2013, T-856 de 2012, T-035 de 2011, T-1027 de 2010, T-170 de 2009 y T-515 de 2007.

11 Sentencia T-970 de 2014.

12 Página 9 del archivo pdf “001. AcciónTutela”.

13 Página 13 ibídem.

La accionada **GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA**, al contestar la acción de tutela manifestó que el 21 de junio de 2022 dio respuesta a la petición del accionante. En sustento, aportó la respuesta a la petición y la constancia de envío realizada el 21 de junio de 2022<sup>14</sup>.

En la respuesta brindada al peticionario, la accionada le allegó la certificación del desarrollo del Contrato No. 1537 de 2015 celebrado el 23 de diciembre de 2015<sup>15</sup>.

Con base en lo anterior, el Despacho procede a analizar si la respuesta brindada por la accionada cumple los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para considerar satisfecho el derecho de petición.

En primer lugar, respecto de la **notificación** de la respuesta, se tiene que ésta fue remitida a los correos electrónicos: [comercia@serticsas.com](mailto:comercia@serticsas.com) y [financiero@serticsas.com](mailto:financiero@serticsas.com) los cuales coinciden con el señalado por el accionante en el acápite de notificaciones del derecho de petición y de la acción de tutela.

En segundo lugar, respecto de la **oportunidad** de la respuesta, se tiene que, aunque no se generó dentro del término de 30 días hábiles previsto en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, fue emitida y notificada durante el transcurso de esta acción de tutela.

Ahora bien, respecto del tercer requisito relativo a resolver de **fondo** y de manera **congruente y completa** lo peticionado, se tiene que la respuesta brindada por la accionada satisface el derecho de petición por las siguientes razones:

El accionante solicitó en la petición se expidiera una certificación actualizada sobre la experiencia en desarrollo del Contrato No. 1537 de 2015, celebrado el 23 de diciembre de 2015; frente a ello, la accionada, expidió la certificación, en la cual precisó la información mínima requerida por el accionante, así:

- Nombre de la empresa contratante: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN.

- Nombre del Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEL VALLE integrado por BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S. “BRAIN INGENIERIA S.A.S.” con participación del 51% y SERTIC S.A.S. con participación del 49%

---

14 Páginas 8 y 9 del archivo pdf “006. ContestaciónAccionada”

15 Páginas 12 y 16 a 18 ibídem

- Número del contrato: Contrato No. 1537 de 2015
  
- Objeto del contrato: Auditoría financiera e interventoría técnica y operativa al contrato GM-001-93 Concesión Buga – Tuluá – La paila – La Victoria.
  
- Fecha de inicio: 31 de diciembre de 2015
  
- Fecha de finalización: 30 de junio de 2023
  
- Valor total facturado a la fecha de expedición de la certificación: \$5.100.995.412,85 incluido IVA
  
- Obligaciones y/o funciones ejecutadas: Revisión de la información de tránsito y recaudo enviado por el concesionario, con el fin de constatar que el ingreso al fideicomiso corresponda al recaudo de peaje obtenido en las estaciones, de acuerdo con las tarifas autorizadas por el departamento; supervisión de las operaciones de recaudo; Conteo de vehículos; Supervisión de las tarifas de los peajes de la Concesión Buga – Tuluá – La Paila (Peaje de Betania y Peaje Uribe); entre otros.
  
- Cargo y firma de quien expide la certificación: Jefe Oficina Asesora de Jurídica, documento debidamente firmado.
  
- E-mail de persona de contacto: [infraestructura@valledelcauca.gov.co](mailto:infraestructura@valledelcauca.gov.co)
  
- Dirección y teléfono de la entidad: Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10, piso 16, teléfono: 6200000 ext. 1399 – 1303- 1300.
  
- Estado del Contrato: En ejecución.

Por lo anterior, considera el Despacho que la respuesta brindada por la **GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA** a la sociedad **SERTIC S.A.S. EN REORGANIZACIÓN**, cumple con los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para tener por satisfecha esa garantía *iusfundamental*, pues atendió de fondo el asunto y además fue debidamente notificada.

Por lo tanto, la presente acción de tutela pierde eficacia e inmediatez y, por ende, su justificación constitucional, por lo que habrá de declararse la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

**RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR** la carencia actual de objeto por **HECHO SUPERADO** dentro de la acción de tutela de **SERTIC S.A.S. EN REORGANIZACIÓN** en contra de la **GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA**, por las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO:** Notifíquese a las partes por el medio más eficaz y expedito, advirtiéndoles que cuentan con el término de tres (3) días hábiles para impugnar esta providencia, contados a partir del día siguiente de su notificación.

Por motivos de salud pública, y en acatamiento de las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, la impugnación deberá ser remitida al email: [j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**TERCERO:** En caso de que la presente sentencia no sea impugnada, por Secretaría remítase el expediente a la Corte Constitucional para que surta el trámite eventual de revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
DIANA FERNANDA ERASSO FUERTES  
JUEZ